

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y CIENCIA EN LA AMAZONÍA

LA COMISIÓN DEMARCADORA DEL PUTUMAYO (1928-1930)

Ombeline Dagicour

Resumen

Hasta la primera mitad del siglo XX, la Amazonía, por mucho tiempo *tierra incógnita*, siguió siendo un espacio difícil de explorar y delimitar. Provistos de inmensos recursos naturales, y a causa de los problemas que implicaban en términos de soberanía y de desarrollo económico, sus confines fronterizos se encontraron en el meollo de las tensiones entre Estados limítrofes. La historiografía peruanista suele considerar que las fronteras “modernas” del Perú son las del presidente Augusto B. Leguía (1908-1912 y 1919-1930). Sin embargo, hasta el presente, la historia del proceso de trazado de la frontera en los márgenes amazónicos del territorio peruano quedó descuidada por los investigadores. Al estudiar los informes de la Comisión mixta peruano-colombiana encargada de trazar la frontera en el Putumayo en pos de la ratificación del tratado Salomón-Lozano (1928), este artículo revela el entrevero de lógicas políticas y científicas que sustentaron la apropiación de sus territorios fronterizos por el Estado peruano.

Summary

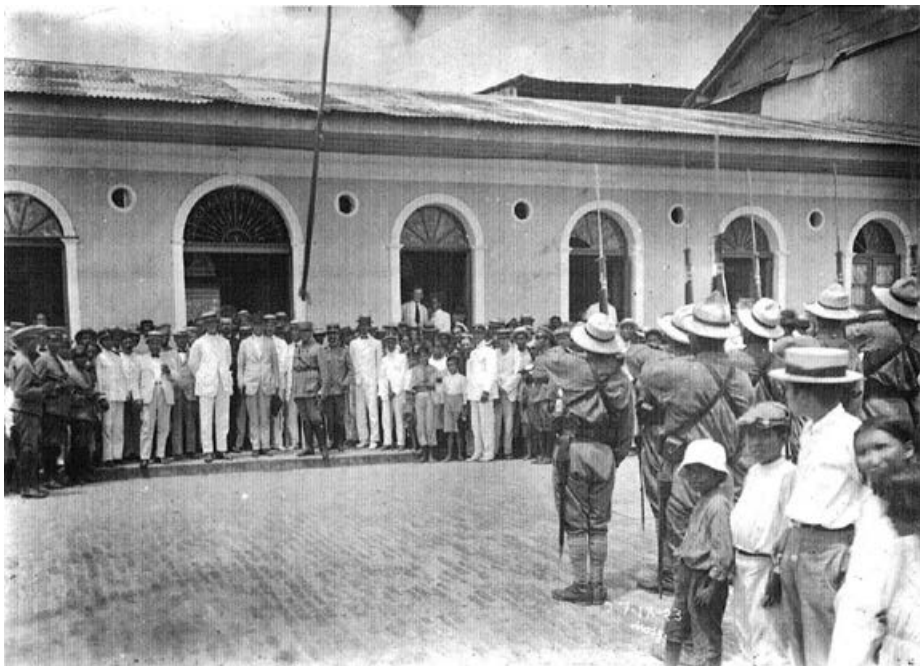
Until the first half of the 20th century, the Amazon, for a long time an unknown land, continued to be a difficult space to explore and define. With immense natural resources, and because of problems involving of sovereignty and economic development, its border boundaries were found at the heart of tensions between neighboring States. Peruvian historiography considers ‘modern’ Peru’s borders those of President Augusto B. Leguía (1908-1912 and 1919-1930). However, up to the present, the history of the process of delineating the border in the Amazonian borders of Peruvian territory was neglected by researchers. Considering the reports of the Peru-Colombia Joint Committee, appointed to draw the border in the Putumayo after the ratification of the Treaty of Salomon-Lozano (1928), this article reveals a vision of the political and scientific logic that sustained the appropriation of its border territories by the Peruvian State.

Palabras claves: Estado-territorio-frontera-ciencia-ingenería

Introducción

En junio de 1920, en su informe anual dirigido al Ministerio del Interior, el prefecto de Loreto, César Ruiz y Pastor, lamentaba “la imprecisión” de los límites internos y externos del departamento ubicado bajo su autoridad. Las incursiones de tropas militares provenientes de las zonas limítrofes de Ecuador y de Colombia, así como los movimientos transfronterizos cotidianos de los habitantes, conformaban un desafío crónico a la soberanía del Estado peruano en sus márgenes territoriales. Heredados en gran parte del período colonial, los deslindes administrativos y territoriales originaron frecuentes incidentes, algunos de los cuales desembocaron en conflictos armados. Si bien a lo largo del siglo XIX, varios procesos de negociación llevaron a la firma de tratados diplomáticos, la ausencia de líneas (*boundaries*) preestablecidas y definitivas capaces de demarcar las soberanías en la cuenca amazónica dejó perdurar una situación de inestabilidad geopolítica hasta entrada la primera mitad del siglo XX. La historiografía peruanista suele considerar que las fronteras “modernas” del Perú son las del presidente Augusto B. Leguía, en el poder por primera vez entre 1908 y 1912, y de nuevo desde 1919 hasta 1930. (Porras Barrenechea, Wagner de Reyna 1981; Pons Muzzo 1961; Bákula 1988, 2002). Ya durante su primer gobierno, Leguía desarrolló una política de delimitación y demarcación destinada a poner en tela de juicio un *statu quo* territorial en el que veía un obstáculo a la atracción del Perú para los capitales extranjeros. De vuelta al poder en 1919, volvió a fomentar esta política. El contexto de posguerra mundial estaba marcado por una acérrima competencia económica internacional e intensa disputa por acceder a las materias primas de la cuenca amazónica. En este marco, la lógica de frente pionero (*frontier*) que se manifestaba en los confines fronterizos de la selva era reveladora de la importancia del asunto que representaba el retroceso de la frontera interna en la construcción del Estado peruano.

La política del leguismo en cuanto a la frontera debe contemplarse a la luz del reto que constituía la construcción de una legitimidad estatal en territorios históricamente enclavados. Sobre este punto, los estudios de historia regional que se vienen multiplicando desde los años 1980 han puesto en evidencia la precariedad de la presencia estatal en los márgenes amazónicos, y más aún su carácter negociado (García Jordán y Sala i Vila 1998; García Jordán 1998; Barclay 2009). Estos trabajos han subrayado la amplia autonomía, desde la época colonial, de regiones fronterizas cuya pertenencia al Estado se apoyaba esencialmente en el despliegue de redes de patronazgo a distintas escalas.



Manifestación patriótica en Iquitos 1923

**Cesáreo Mosquera
Colección particular**

El esfuerzo gubernamental por reafirmar la soberanía del Estado central en los márgenes fronterizos amazónicos se dio en el marco de una sociedad profundamente traumatada por la derrota frente a Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) y por las consecuencias territoriales del conflicto: la pérdida de las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá, ricas en salitre y minerales. Hay que mirarlo a través de la lente de una voluntad de asegurar el acceso a los recursos del suelo y del subsuelo amazónico, en un contexto geopolítico entonces inestable. Más, fundamentalmente, la acción del gobierno leguista representa un punto de inflexión decisivo respecto a la centralización del Estado peruano y la emergencia de una gubernamentalidad que buscaba lograr más eficacia en cuanto a la gestión del territorio, de sus recursos y del capital humano (Dagicour 2017; sobre el concepto de gubernamentalidad forjado por el filósofo Michel Foucault, cf. Drinot 2011; Burchell, Gordon y Miller 1991).

La demarcación de la Amazonía peruana se imponía como una indispensable condición previa a la transformación de los usos económicos de las tierras tropicales. Materializó el nacionalismo económico que orientó de manera decisiva el desarrollo del aparato estatal durante la década de 1920, con el objetivo de generalizar los modos de producción y explotación capitalistas modernos a la totalidad del territorio nacional, incluso hasta sus confines tropicales (Dagicour 2017). Cabe

precisar que tal programa continuaba los esfuerzos desplegados por los gobiernos sucesivos a partir de la posguerra del Pacífico para desenclavar, poblar y desarrollar una agricultura comercial en la selva. Recordemos que en 1909, durante su primera presidencia, Leguía había promulgado la nueva Ley de Terrenos de la Montaña, que redefinía el marco legal para facilitar la privatización de las tierras públicas amazónicas y su explotación agrícola por colonos provenientes de Europa y los Estados Unidos. En estos márgenes tropicales deliberadamente considerados como vacíos e improductivos, el régimen leguista –como otros anteriormente– procedió al desplazamiento de las poblaciones indígenas. Mientras en los círculos intelectuales dominaban las teorías del racismo pseudocientífico y del darwinismo spenceriano, desde Lima, la visibilidad de la Amazonía se reducía a la mera disponibilidad de sus recursos naturales (García Jordán 1992).

Tal es, a grandes rasgos, el contexto dentro del cual las negociaciones secretamente emprendidas por el presidente Augusto B. Leguía y el gobierno colombiano llevaron, el 24 de marzo de 1922, a la firma del tratado Salomón-Lozano, que fijó el nuevo trazado de la frontera en la zona de Caquetá-Putumayo, ubicada dentro del Trapecio amazónico.

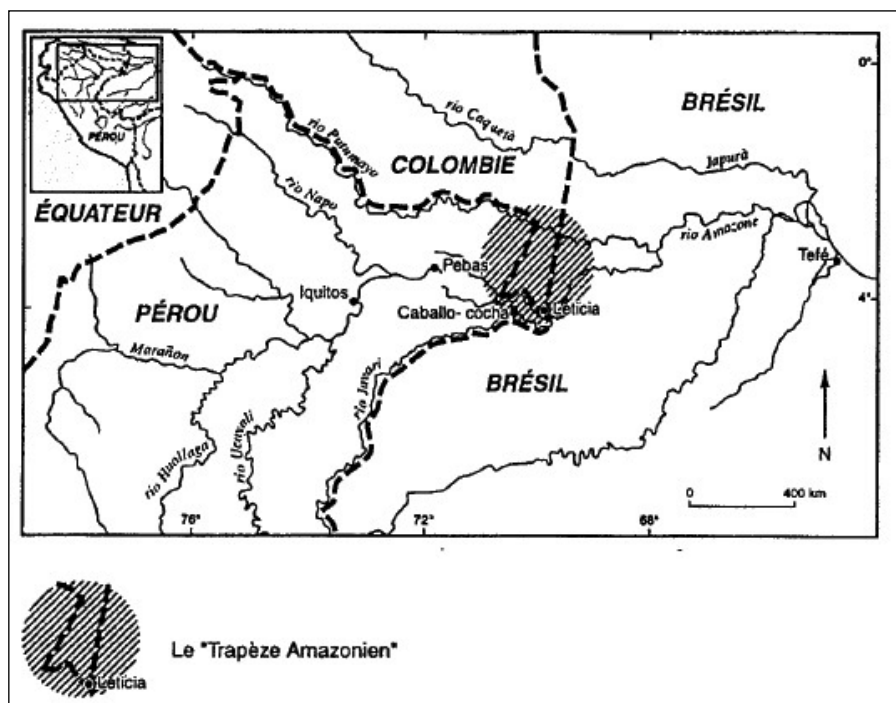


Figura 1. El Trapecio amazónico

Fuente: Jean-Pierre Chaumeil, «Par-delà trois frontières, l'espace central du Trapèze amazonien (Pérou, Colombie, Brésil)», *Autrepart* (14), 2000, pp. 53-70, p.57.

Según el artículo primero del tratado, la línea de demarcación tiene como punto de partida un lugar situado en la desembocadura del río Cuhimbé en el Putumayo, y a continuación sigue el curso de este último río. En vez de continuar hacia el este y Brasil, este trazado marca un cambio de dirección hasta el río Yaguas. A partir de ahí, la frontera se vuelve sumamente geométrica. Su trazado sigue una línea recta hacia el sur, hasta llegar a la confluencia de Boca Atacuai, uno de los afluentes del Amazonas. A continuación, la frontera sigue la vaguada del río Amazonas hasta llegar al límite fijado por el tratado internacional concluido entre el Perú y Brasil el 23 de octubre de 1851. Con este trazado, el Trapecio llamado de Leticia quedaba bajo dominio colombiano. A modo de compensación, el tratado preveía la cesión a Perú del triángulo San Miguel-Cuhimbé-Sucumbios, a pesar de que Ecuador también lo declarara parte de su territorio. Mientras las provincias del sur seguían ocupadas por Chile desde 1883, los términos del acuerdo con el gobierno colombiano dividieron a la opinión pública peruana, fustigando aún más la oposición al régimen centralizador y autoritario del presidente Leguía (Tudela y Varela 1925; Feijo 1923; Ugarteche 1930, 1933; Mayer de Zulen s/f). Pese a los numerosos cuestionamientos, el tratado fronterizo fue oficialmente ratificado por ambos gobiernos en 1928.

Por la lejanía espacial del Putumayo, sus condiciones particularmente inhóspitas, así como por la escasez de informaciones geográficas y de mapas, trazar la frontera para otorgar una existencia tangible a la decisión diplomática constituía para los Estados peruano y colombiano un verdadero desafío al ejercicio de su soberanía en sus márgenes. ¿Cómo delimitar, en efecto, un espacio mal conocido, que seguía siendo objeto de exploración en estos principios del siglo XX? Como lo subraya la historiadora Camille Lefebvre, fueron muchos los tratados internacionales firmados con muy escaso conocimiento de la geografía local. Comisiones binacionales de delimitación y demarcación fueron encargadas de viajar al terreno para verificar la conformidad del trazado fronterizo y, llegado el caso, adaptarlo a las configuraciones topográficas y a las realidades sociopolíticas locales (Lefebvre 2011: 109-138; 2015). El establecimiento de la Comisión mixta peruano-colombiana tras la ratificación del tratado Salomón-Lozano invita a repensar el tramado de lógicas científicas y políticas que subyacieron en la inscripción física de la nueva frontera.

Cabe precisar que después de la Guerra del Pacífico, fueron esencialmente juristas y militares los que en el Perú se adueñaron de las cuestiones relativas a las separaciones fronterizas y a la seguridad nacional. Generalmente empapadas de un argumento propenso a defender la integridad territorial y a restaurar la supuesta grandeza del país en la escena internacional, sus análisis geopolíticos conceptualizaban la historia de la demarcación fronteriza peruana como la de un proceso frustrado desde la Independencia. Estas representaciones les sirvieron de punto de anclaje a trabajos más recientes en el ámbito de la historia diplomática

y del derecho internacional, que se limitaron a cuestionar la validez de los principios del *Uti possidetis* y a echar luz (en forma más o menos descriptiva) sobre los procedimientos de negociación y arbitraje (Porras Barrenechea y Wagner de Reyna 1981; Pons Muzzo 1961; Bákula 1973). Por consiguiente, este enfoque dejó completamente de lado el análisis del dispositivo racional y científico en la elección de la ubicación definitiva de las fronteras, así como la historia de su materialización en el espacio. Queremos insistir en las diversas escalas de análisis que intervinieron en el proceso de construcción de la frontera externa de la Amazonía peruana. Al interesarnos por las formas de negociación y relaciones de fuerzas en la comisión mixta peruano-colombiana, nos proponemos evidenciar las numerosas idas y vueltas entre el tratado diplomático y las realidades del terreno.

En cuanto a su estructura, en primer lugar, este artículo regresa a la controversia suscitada del lado peruano por el tratado Salomón-Lozano, más precisamente en el departamento de Loreto. Frente al proyecto centralizador leguista, la airada oposición de las élites políticas y económicas regionales atestigua la forma en que el significado de la frontera era percibido distintamente por los actores a escala local. Nos interesaremos enseguida por la identidad de los que trazaron la frontera. En efecto, el perfil de los miembros de la comisión mixta refleja una imagen concreta del proceso de formación de elites técnicas estatales, cuya legitimidad se basaba en las competencias específicas en cartografía, saberes geográficos y manejo de instrumentos de precisión. En fin, ¿qué es una confluencia? Esta pregunta invita, como veremos, a rastrear las complicaciones que podían surgir de la interpretación de los conceptos geográficos del tratado fronterizo de 1922. El desconocimiento y la propia complejidad de la cuenca oro-hidrográfica amazónica llevan a interrogarse sobre la estrecha relación entre producción de saberes geográficos, capacidad de peritaje estatal y construcción de los territorios fronterizos amazónicos a principios del siglo XX.

I. Demarcación fronteriza y resistencias: el tratado Salomón-Lozano bajo fuego de oposiciones regionalistas

El 5 de agosto de 1921, Guillermo Cervantes, oficial de la guarnición de Iquitos, se hizo de la prefectura firmemente decidido a tomar las riendas de los asuntos del departamento de Loreto, para “su bienestar y su progreso”. En estos territorios lejanos, las autoridades civiles, así como las guarniciones, no habían cobrado sus sueldos hacía meses. Este alzamiento expresaba la imbricación de reivindicaciones regionalistas con el creciente descontento de la élite política y comercial de Iquitos, principal centro económico de Loreto -el cual representa el 49 % de la superficie total de la Amazonía peruana- ante el continuo derrumbe de la producción de caucho desde la década de 1910. Alrededor del capitán Cervantes, un puñado de militares y notables locales organizaron un Comité revolucionario. El 1° de septiembre de 1921, el grupo publicó en la prensa regional su *Manifiesto a la Nación*, determinado a oponerse al “régimen dictatorial instalado el 4 de julio de 1919”

. Denunciando la “tiranía” centralizadora que según sus integrantes imponía la Constitución fundadora del régimen de la Patria Nueva, promulgada en 1920, el Comité exigía el restablecimiento de la ley orgánica de 1860. La instrumentalización del patriotismo a fines de baja política, lindando con la traición del interés nacional, también figuraba en el meollo de las críticas dirigidas al régimen leguista:

«Se ha visto explotar el patriotismo nacional, con la promesa del rescate de nuestras provincias cautivas, adormeciendo el sentimiento público, mientras se trata de vender una de las más ricas regiones del Territorio Nacional: el Putumayo peruano, que el Régimen en su sed insaciable de oro, ha ofrecido a Colombia, mediante el pago de una indemnización de siete millones de soles. ¡Pobre Patria nuestra y desventurado pueblo peruano!».

A pesar de que las negociaciones diplomáticas entre el régimen leguista y el gobierno colombiano fueron emprendidas en el mayor secreto, ya desde el año 1921 la probabilidad de un acuerdo que perjudicara al Perú generó agitación en el departamento de Loreto. La perspectiva de una línea de demarcación territorial impuesta desde Lima era airadamente cuestionada por la élite política y económica regional.

Amenazada su estabilidad, el régimen de la Patria Nueva dirigió hacia Loreto una dura campaña de represión. Dos regimientos fueron enviados al lugar, el primero bajo el mando del comandante Juan P. Santibáñez, el segundo bajo el del capitán Genaro Martos (Martos 1951). Ante el veloz avance del ejército, el capitán Cervantes pudo contar con el apoyo de Julio César Arana, el cauchero más importante del Oriente peruano, también senador suplente y presidente de la Cámara de comercio de Loreto. Fechado en 1913, el mapa reproducido a continuación, que representa la parte norte de Loreto, permite visualizar claramente la considerable extensión de la *Peruvian Amazon Rubber Company*, el imperio edificado por Julio César Arana, cuya sede social se ubicaba en Londres.



Fuente: LOC, Geography and Map Reading Room-Peruvian Maps, 1910-1930, *Región Selvática del Norte del Perú*, delineada por orden del Excmo. Señor Guillermo Billinghurst, presidente de la República, 1913, 1/200 000, por Camilo Vallejos Z., cartógrafo de la Sociedad Geográfica de Lima.

En estos márgenes fronterizos, Arana también poseía varias propiedades en Colombia, y mantenía estrechas relaciones comerciales con emprendedores e industriales del otro lado de la frontera. Frente a lo que consideraba una intrusión del Estado central, el posicionamiento de Julio César Arana ejemplifica la manera en que el significado de la frontera era percibido diferentemente por las **élites regionales que tenían intereses económicos a ambos lados de la línea divisoria entre las soberanías estatales**.

El 3 de enero de 1922, el diario *La Crónica* anunció sin embargo que “la revolución en Loreto ha terminado”¹. Si bien la severa represión del régimen leguista permitió el regreso a una aparente calma, el periódico limeño relataba el calamitoso estado económico en que el alzamiento había dejado a Loreto. La propaganda gubernamental, aferrada a generar una ilusión de consenso alrededor del régimen de la Patria Nueva, no podía disimular la existencia de una crónica oposición al intrusivo proyecto de territorialidad del poder central con respecto a los márgenes del territorio nacional.

En 1927, ante la inminente ratificación oficial del tratado Salomón-Lozano, Julio César Arana publicó un manifiesto en Lima para expresar públicamente su desacuerdo (Arana 1927). El 10 de diciembre del mismo año, las elites socioeconómicas de Loreto, incluso algunos representantes de las autoridades políticas locales, le

1 «La revolución en Loreto ha terminado», *La Crónica* n°3525, Lima, 3 de enero de 1922, p. 4.

enviaron un virulento telegrama al presidente Leguía². Exigían el envío a Loreto de una comisión parlamentaria y la organización de un plebiscito. Con motivo de su conocimiento concreto del territorio, se consideraban además más legítimos que el gobierno central para decidir sobre los intereses del departamento. Reiteraban sin embargo el deber que atañía al Estado de defender la integridad del territorio nacional de acuerdo con los principios del *Uti possidetis*. Frente a las consecuencias negativas, según ellos, del tratado fronterizo para la organización del comercio regional, condenaban la acción del gobierno con motivo de que fuera llevada a cabo en contra de la prosperidad y del bienestar común.

La reacción de Augusto B. Leguía fue inmediata. Dos días después de haber recibido el telegrama, el presidente se comunicó con el prefecto de Loreto, el coronel Molina Derteano³. Le encargó establecer la lista de los funcionarios sediciosos, y recordarles su deber de lealtad al régimen. Barriendo sin más las críticas, Leguía reafirmaba la plena autoridad del poder central en materia de política exterior, insistiendo sobre su propia legitimidad en cuanto jefe del poder ejecutivo. En cuanto la Constitución de 1920 representaba la clave de este régimen eminentemente presidencial, Leguía, invocando el artículo 151, desempeñaba la representación del Estado tanto en el plano interior como en el exterior, y debía empeñarse en preservar la seguridad de la República⁴. Por ello se dirigió al prefecto de Loreto en los siguientes **términos**:

«Solo es excusable la actitud de los que me dirigen el radiograma relacionado con el protocolo Salomón-Lozano, porque ignoran las verdaderas causas del Tratado con Colombia. [...] Esa ignorancia, sin embargo, no excusa a los servidores públicos que, con olvido de sus deberes y de la lealtad que deben al Régimen, se unen a los que protestan de sus actos o pretenden enmendarlos. Mándeme usted una lista completa de todos los que se hallan en esa condición y haga usted saber, de una manera general, que, por la Constitución, el Presidente de la República tiene la gestión de los asuntos de los tratados. Haga también saber que no se permitirá ningún acto que se produzca en obstrucción al cumplimiento del Tratado con Colombia»⁵.

2 MINRELEX, Correspondencia del Presidente Augusto B. Leguía, Caja 9, Documento n°128, Publicados en los diarios del departamento de Loreto, Iquitos, 10 de diciembre de 1927.

3 MINRELEX, Correspondencia del Presidente Augusto B. Leguía, Caja 9, *Respuesta del Presidente de la República a los telegramas del 12 de diciembre de Iquitos pidiendo que no se mutile Loreto, mandado publicar en todos los diarios y en boletines de Iquitos por el Prefecto Coronel Molina Derteano*, depositado en Lima, 14 diciembre de 1927, recibido Iquitos el 16 Prefecto Coronel Molina Derteano, Iquitos.

4 http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1920/Cons1920_TEXTO.pdf. (última consulta julio de 2016).

5 MINRELEX, Correspondencia del Presidente Augusto B. Leguía, Caja 9, *Respuesta del Presidente de la República a los telegramas del 12 de diciembre de Iquitos pidiendo que no se mutile Loreto, mandado publicar en todos los diarios y en boletines de Iquitos por el Prefecto Coronel Molina Derteano*, depositado en Lima, 14 diciembre de 1927, recibido Iquitos el 16 Prefecto Coronel Molina Derteano, Iquitos.

La ratificación del tratado Salomón-Lozano fue confirmada durante el año 1928⁶. En una entrevista concedida a un periodista del *Chicago Tribune* en febrero de 1928, a poco tiempo de su validación, el presidente Leguía detalló los motivos de su inflexibilidad. En un inglés impecable, expresa su intención de aportar una solución definitiva a la discrepancia territorial con Ecuador. La inestabilidad reinante a lo largo de la frontera del norte constituía además a sus ojos una amenaza permanente no solo para la soberanía peruana, sino también para el desarrollo económico del país. Por ello, la ratificación del tratado Salomón-Lozano resultaba un prerrequisito ineludible:

«There remains only one question, that of the Ecuadorian frontier and my Government, animated by a wide American outlook and most peaceful intentions, (...) will arrive at a satisfying solution by arbitration, if Ecuador wishes, or by direct negotiation. The recent boundary treaty with Colombia will facilitate the solution»⁷.

Sin embargo, un recodo por la historiografía peruanista permite constatar la vigencia, hasta la actualidad, de la polémica que generó el tratado Salomón-Lozano por sus consecuencias territoriales. La publicación en 1932 de la obra anónima titulada *El Tratado Salomón-Lozano y la Cuestión de Leticia* atestigua la radicalización de la opinión pública peruana después de caído el régimen leguista⁸. Considerado una “enorme traición a la Patria”, el tratado fue erigido en prueba “del gran desprecio en cuanto a los sentimientos y los derechos del pueblo peruano” del presidente Leguía⁹. Algunos años después, en su *Historia de la República*, Jorge Basadre tomó en consideración los argumentos geopolíticos de Leguía, pero siguió condenando las soluciones adoptadas (Basadre 1968). Las publicaciones más recientes resaltan los términos de un acuerdo considerado particularmente injusto (Chirinos Soto 1982). Citemos, a modo de ejemplo, a Carlos Dávila Herrera, quien en su estudio regional acerca de Loreto, califica como particularmente “nefasto” el tratado Salomón-Lozano (2013: 16).

II. Élités técnicas estatales y trazado de la frontera

El 19 de septiembre de 1928 fue establecida la Comisión mixta de delimitación y demarcación del Putumayo. Del lado peruano, la lista de los integrantes de la comisión nacional proporciona una imagen concreta de las dinámicas de

6 El Tratado Salomón-Lozano fue aprobado el 5 de octubre de 1925 por el Congreso colombiano a través de la Ley n°55, asimismo por el Congreso peruano por la resolución n°594 del 20 de diciembre de 1927. Fue ratificado oficialmente por el presidente Leguía el 23 de enero de 1928 y por la presidencia colombiana el 17 de marzo de 1928. El Tratado fue además ratificado por la Liga de las Naciones el 29 de mayo de 1928.

7 MINRELEX, Correspondencia del presidente Augusto B. Leguía, Caja 4, Documentos de Leguía, suite, folios 51 a 75, Documento n°67, Lima, 9 de febrero de 1928, *Entrevista del presidente Leguía con John Clayton*, Chicago Tribune Press Service. En la entrevista, el presidente Leguía también se muestra preocupado por una posible alianza militar entre Chile y Ecuador.

8 Anónimo, *El Tratado Salomón-Lozano y la Cuestión de Leticia*, Lib. E Impr. San Cristóbal, 1932.

9 Ibid, p. 55.

profesionalización que venían caracterizando al ejército peruano desde la Guerra del Pacífico. Fue el coronel de infantería Roberto López, nombrado por el gobierno leguista, el que desempeñó la dirección de la comisión. Especialista en materia de trabajos cartográficos y de operaciones de demarcación fronteriza -había reemplazado en 1922 al experto militar británico Arthur Woodroffe como supervisor de los trabajos de delineación de la frontera con Brasil- Roberto López era un antiguo oficial del Servicio topográfico del Estado Mayor del Ejército, creado en 1906, el cual había sido reorganizado en 1913 para convertirlo en Servicio geográfico del Ejército, según el modelo francés. El mismo año, Roberto López había proseguido con su especialización al sumarse al Batallón de ingenieros, cuya creación se remontaba a 1910, durante el primer gobierno de Leguía (Arbulú Gallieni 1988: 100, 169).

La presencia de Roberto López a la cabeza de la comisión peruana es reveladora de la afirmación, dentro del ejército peruano, de un grupo de ingenieros militares socialmente reconocidos por su dominio de saberes técnicos y prácticas específicas ligadas a los retos de la defensa del territorio y su cobertura cartográfica (Dagicour 2017). El resto del personal técnico de la comisión confirmaba la dinámica de profesionalización que sostenía el esfuerzo de modernización de las fuerzas armadas peruanas después de la guerra del Pacífico, particularmente gracias a la acción de la Misión militar francesa presente en Lima ya en 1896 (Rouquié 1982; Saint John 2007; Velásquez 2013). Entre estos integrantes encontramos a los lugartenientes de artillería Francisco Cebreros y Bernardo Dianderas, ambos cursaron la especialización en ingeniería militar de la Sección de alumnos oficiales en ingeniería, creada en 1922 en la Escuela Militar de Chorrillos (Arbulú Gallieni 1988, *op.cit.*: 171). Añadamos que, ya en 1925, el oficial Dianderas se había sumado al Servicio Geográfico y pudo participar en los trabajos relativos al mapa nacional¹⁰.

El régimen de la Patria Nueva representó un momento decisivo dentro de la racionalización y modernización de la institución militar, bajo el amparo de varios expertos y misiones militares provenientes de Europa -Francia y Alemania- así como de los Estados Unidos. Durante la década de 1920, distintos servicios técnicos fueron reorganizados, como el Servicio Geográfico del Ejército, mientras otros eran creados, entre ellos el Servicio de Fotogrametría Aérea en 1929. Además, bajo el impulso del ingeniero Fermín Málaga Santolalla, ministro de Marina entre 1923 y 1925, y después ministro de Guerra de 1925 a 1928, se consolidó la visibilidad institucional de la ingeniería militar en el plan de estudios de las escuelas militares limeñas. Estas evoluciones en el aparato estatal matizan las interpretaciones clásicas que Leguía se empeñó en debilitar al ejército durante el Oncenio (Camacho 2016). El discurso anti-oligárquico de la Patria Nueva resultaba incompatible con la amenaza que dejaba subsistir un fuerte poder militar. Por ello, la estabilidad del régimen leguista dependía en gran parte de su dominio sobre el ejército. No obstante, las reformas emprendidas por el régimen leguista dejan vislumbrar más bien que Leguía no

10 AHM, año 1925, Ministerio de Guerra, Lima, resolución del 16 de febrero de 1925.

buscó “debilitar” al ejército sino reconfigurar la posición de los militares en cuanto élite sociopolítica al acelerar su reorientación profesional. Para mantener a flote su ambicioso programa de desarrollo y regeneración nacional, el régimen leguista buscó involucrar a los militares en un largo y complejo proceso de consolidación profesional. Además, la defensa y colonización del territorio involucraba a los militares como actores ineludibles de la construcción del Estado. Ante este objetivo, y a pesar de limitaciones económicas, la transformación de los oficiales en una élite técnica, socialmente reconocida por sus habilidades, fue encarada por el régimen leguista como el más potente antídoto a su politización e injerencia crónica en la vida política peruana desde la independencia. El derrocamiento de Leguía en agosto de 1930 atestigua, sin embargo, las dificultades del régimen para moldear efectivamente el comportamiento de los oficiales peruanos.

¿Cómo era el asunto del lado colombiano? A la inversa, el perfil de la comisión colombiana se singulariza por una mayor presencia del elemento civil. La dirección de la comisión fue otorgada al ingeniero Darío Rozo Martínez, egresado de la Facultad de Matemáticas y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Bogotá. Ya en la década de 1870, el proyecto político de las élites gubernamentales colombianas, tendiente a desarrollar “*a more modern, secular spirit of technical professionalism*” (Safford 1976: 193), se había traducido por el rol decisivo del Colegio Militar, que reunía los cursos de formación militares y de ingeniería civil, a través del fortalecimiento de la orientación técnica en la enseñanza superior. A pesar de que dos militares fueran parte de la comisión colombiana de demarcación con el Perú, es la primacía de los ingenieros civiles la que llama nuestra atención.

A modo de consecuencia de esta desproporción entre civiles y militares entre las dos comisiones nacionales, no tardaron a manifestarse bloqueos dentro de la Comisión mixta, los cuales revelaban no solo divergencias metodológicas, sino fundamentalmente la imposibilidad de fijar una frontera aceptada por todos.

III. ¿Qué es una confluencia?

Volvamos ahora al tratado Salomón-Lozano. Su letra afirmaba que el trazado fronterizo debía bordear el río Putumayo hasta llegar a su confluencia con el Yaguas. Desde ahí la frontera seguía una línea recta hasta un segundo punto de confluencia, con el río Atacuari, afluente del Amazonas. En varias oportunidades, el término de confluencia se utilizaba sin que en apariencia generara ninguna dificultad. Pero esto era menospreciar la complejidad de la cuenca oro-hidrográfica del Amazonas. En el terreno, la interpretación del concepto geográfico se hizo más compleja. De estación en estación, los ríos cambian su trazado, lo que a veces acarrea importantes escisiones. En estas circunstancias, determinar la ubicación exacta de los puntos de confluencia de los ríos Atacuari y Yaguas constituía un verdadero desafío científico. Mientras tanto hubiera hecho falta ponerse de acuerdo, de antemano, sobre la definición misma de tal concepto.

En octubre de 1928, poco tiempo después de la instalación de la Comisión mixta, emergió la controversia entre ambas partes. En el terreno, ¿cómo diferenciar una desembocadura de una confluencia? Cada parte esgrimió su posición con argumentos transversales. El debate científico en la Comisión mixta es un buen ejemplo de la dificultad de interpretar los conceptos geográficos de los tratados internacionales al encarar las realidades locales. Revela, generalmente, las asimetrías y relaciones de fuerzas, ya que detrás de los desacuerdos científicos, son asuntos de orden político, económico y social los que tenemos que descifrar.

En una nota del 12 de octubre de 1928 dirigida a Roberto López, el ingeniero colombiano Darío Rozo Martínez esclareció su posición en los siguientes términos:

«En mi deseo de entenderme lo más pronto posible sobre el asunto de la definición de confluencia y de boca, me permito darle por escrito las razones que hay para tener como del mismo significado las palabras boca y confluencia»¹¹.

A su modo de ver, desembocadura y confluencia eran sinónimos, y una confluencia no remitía a otra cosa que una extensión en donde se reúnen dos o varios ríos (el paraje, o la región). Para respaldar su posición, el ingeniero colombiano se apoyó en una bibliografía geográfica internacionalmente reconocida. Habiendo consultado varios diccionarios enciclopédicos, llegó a convencerse de la ausencia de cualquier contenido técnico verdadero. Además, toda la complejidad surgía de la necesidad de adaptar la definición teórica a las necesidades prácticas de la demarcación de fronteras. Para lograrlo, había que identificar un punto preciso (poco importa cuál) comprendido dentro de la zona de confluencia/desembocadura por donde llegara a pasar la línea de separación¹². Sin embargo, dos días después, Roberto López le contestó a su homólogo colombiano refutando rotundamente la idea de considerar como sinónimos la embocadura y la confluencia¹³. Al contrario, el militar peruano resaltó la alta tecnicidad del término de confluencia y, más aún, según él se trataba de un punto precisamente identificable. Si bien le concedía de buena gracia a Darío Rozo la validez de la definición que proponían la mayor parte de los diccionarios geográficos según los cuales la confluencia es una extensión (el paraje), a pesar de ello, para él lo que debía prevalecer era la etimología misma del término “paraje”. Procedente del latín “*paratum*”, la confluencia se referiría a un lugar/sitio preciso¹⁴. En el terreno, sería el sitio más profundo del lecho superior y del lecho inferior de los ríos donde habría que ubicar la confluencia.

11 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-8, Copia de la nota del Jefe de la Comisión Colombiana, Darío Rozo M., pasada al Jefe de la Comisión Peruana, Iquitos, 12 de octubre de 1928.

12 *Ibid.*

13 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-8, Respuesta peruana a la nota del Jefe colombiano, Iquitos, 14 de octubre de 1928.

14 *Ibid.*

Con aquella definición, Roberto López se erigía no solo en defensor de los intereses del gobierno peruano sino también como el garante del verdadero “espíritu” del tratado Salomón-Lozano, al recordar que “éste es el concepto técnico que mi Gobierno ha creído que podrían darle, los personeros encargados de la ejecución del Tratado”¹⁵. En todo caso, tras largos meses de fastidiosos debates teóricos y metodológicos, ambas partes llegaron a un acuerdo acerca de una definición. Las Actas de la sesión de la Comisión mixta del 15 de octubre de 1928 aprueban el acuerdo según el cual «se acordó que para los efectos de la demarcación, se entiende por confluencia de dos ríos el punto más profundo de la unión de sus *thalwegs*»¹⁶. Sin embargo, este acuerdo no aguantó mucho tiempo. En efecto, las Actas de la tercera sesión, fechada en el 6 de febrero de 1929, reflejan una incomprensión que parecía no tener fin¹⁷.

Más allá del aspecto técnico propiamente dicho, son asuntos de orden político y económico los que constituyen la raíz del desacuerdo. En efecto, la ubicación exacta del punto de confluencia del río Atacuari con el Amazonas iba a determinar la nacionalidad de tres islas: Coto, Ampiyacu y Tigre, siendo esta última la de mayor superficie con sus 6 000 hectáreas¹⁸. La disputa que agitaba a la Comisión mixta remitía por lo tanto al entremezclamiento de programas científicos y políticos. Fundamentalmente, traducía el hecho de que “la ciencia tiene nacionalidad”¹⁹. Para Darío Rozo Martínez, la confluencia del Atacuari con el Amazonas se encontraba al norte de la isla Tigre, en un brazo del río del mismo nombre. Al contrario, Roberto López estimaba que esta confluencia se situaba río arriba, al formar la unión del Tigre con el Amazonas²⁰. El siguiente mapa permite visualizar la controversia:

15 *Ibid.*

16 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, *Arreglo de límites entre la República de Colombia y la República del Perú*, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores, segunda edición, Imprenta Nacional, 1980, Actas de la Comisión Mixta Demarcadora de los Límites Perú-Colombia, Acta N°2, Sesión del 15 de octubre de 1928, Iquitos, p. 30.

17 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, *Arreglo de límites entre la República de Colombia y la República del Perú*, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores, segunda edición, Imprenta Nacional, 1980, Actas de la Comisión Mixta Demarcadora de los Límites Perú-Colombia, Acta N°3, sesión del 6 de febrero de 1929, Iquitos.

18 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, *Arreglo de límites entre la República de Colombia y la República del Perú*, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores, segunda edición, Imprenta Nacional, 1980.

19 La expresión proviene de la ponencia del historiador Rafael Sagredo «La geografía ignorada. Naturalistas en los Andes», Coloquio internacional *Sciences, savoirs et techniques en Amérique ibérique* organizado por Annick Lempérière y Clément Thibaud, 29-31 de enero de 2015, París, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

20 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-9, Cable de Darío Rozo M al Ministro de Colombia, 8 de noviembre 1930.

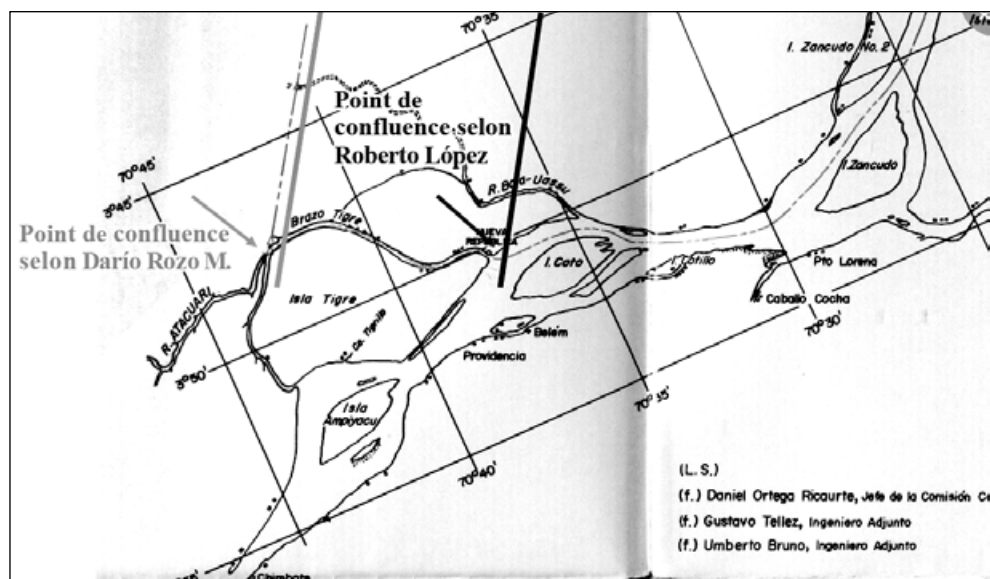


Figura 4. Controversia alrededor de una confluencia.

Elaboración propia. Fuente: AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Arreglo de límites entre la República de Colombia y la República del Perú, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores, segunda edición, Imprenta Nacional, 1980.

Leyenda:

- Trazado fronterizo según Darío Rozo Martínez, jefe de la comisión colombiana.
- Trazado fronterizo según Roberto López, jefe de la comisión peruana.

La posición del coronel Roberto López dejaba al descubierto su ambición de mantener la mayor superficie territorial posible para el Perú. Además, al ubicar el punto de confluencia más río arriba del Amazonas, toda la línea geodésica Yaguas-Atacuari quedaba desplazada hacia el este, es decir hacia Colombia.

Sin embargo, el empecinamiento del jefe de la comisión peruana no tardó en generar fastidio dentro del gobierno colombiano:

«Ocurre preguntar: ¿por qué tan extraño empeño del Jefe de la Comisión Peruana en una tesis condenada, por modo ineludible al fracaso? Es necesario observar que las dos comisiones no han sido enviadas a buscar terrenos para sus respectivos países, sino a medir, de acuerdo con el Tratado y con la realidad de las cosas, unas líneas de frontera entre Colombia y el Perú. Tal es la cuestión»²¹.

En una nota confidencial, el jefe de la comisión colombiana se quejó de la obstrucción sistemática en la que incurría su homólogo peruano, ocasionando no solo la paralización de los trabajos de la comisión sino también importantes gastos

21 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-11, Legación de Colombia, Memorándum, Lima, 27 de mayo de 1929. [Anónimo].

adicionales para ambos gobiernos²². Apenas un año después de la ratificación del tratado diplomático, la Comisión mixta se encontraba en una insostenible situación de atascamiento.

Fue finalmente la implicación de ambos gobiernos en la controversia técnica la que permitió sacar a la Comisión mixta de la crisis en que se había estancado. Para el presidente colombiano Miguel Abadía Méndez (1926-1930) así como para Augusto B. Leguía, se trataba de llegar a una solución aceptable sin dejar de mantener una fachada de cordialidad. Nada menos que el prestigio internacional de ambos países estaba en juego. El asunto era particularmente espinoso para el régimen leguista, involucrado al mismo tiempo en el procedimiento de arbitraje con Chile bajo el auspicio de los Estados Unidos. La búsqueda de ejemplaridad, derivada de los principios de fraternidad panamericana, se tradujo especialmente en las instrucciones enviadas a la Comisión mixta con fin de que borrara lo más posible de sus actas cualquier rastro del desacuerdo²³.

Un memorando confidencial, hallado en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, permiten nuevas luces sobre la resolución de la controversia. Fechado en el mes de junio de 1929, fue redactado por el teniente comandante Harold B. Grow, integrante de la misión naval estadounidense presente en el Perú desde 1920²⁴. Hombre de confianza del presidente Leguía, Grow desempeñó el papel de intermediario privilegiado. Comisionado por el régimen leguista, viajó a Bogotá para debatir los términos de una solución amistosa con el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Fabián Lozano. Este documento revela que la elección de la ubicación definitiva de la frontera peruano-colombiana en el Putumayo provino de un acuerdo negociado directamente entre el Palacio de Gobierno en Lima y la cancillería colombiana en Bogotá.

De acuerdo con la posición de Darío Rozo Martínez, el diplomático colombiano se mostró inflexible sobre la ubicación de la confluencia del Atacuari al norte de la isla Tigre, en el brazo del río epónimo²⁵. En su informe, el comandante Grow le confirmó al presidente Leguía que el gobierno colombiano tenía la intención de mantener la contigüidad territorial con el Alto Amazonas, así como su proyecto de construir una línea de ferrocarril en la región limítrofe con el Perú²⁶. Aquellas pretensiones territoriales en esta parte del Putumayo reflejan el amplio programa de colonización civil y militar que quería implementar el gobierno colombiano en los

22 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-12, Legación de Colombia, Memorándum, 16 de noviembre de 1929.

23 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-10, Personal-reservado, Informe de Roberto López, Jefe de la Comisión peruana de Límites al Ministro Pedro José Rada y Gamio, Iquitos, 5 de febrero de 1929.

24 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198 LCA 8-11, *Memorandum del Capt. H.B. Grow, para su excelencia el Presidente del Perú*, junio de 1929.

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*

confines tropicales de su territorio nacional. Durante el mes de noviembre de 1928, el subteniente de la guarnición peruana de Leticia avisó a sus superiores de la visita de una Comisión especial encargada de averiguar las posibilidades de poblamiento a lo largo de los ríos Caquetá y Putumayo²⁷. Como contrapartida de verse garantizada cierta forma de continuidad espacial, el ministro colombiano estaba dispuesto a reconocer la soberanía del Perú sobre las islas Tigre, Coto, Ampiyacu y Cotillo. Estos “regateos” entre el ministro y el comandante Grow tuvieron el efecto de desacreditar las posiciones del coronel Roberto López²⁸. Considerándolas excesivas y sin real beneficio, el comandante Grow estimó que el interés del Perú residía en la aceptación del acuerdo.

El siguiente mapa, que acompañaba el memorando redactado por Grow, presenta la síntesis de las negociaciones relatadas más arriba²⁹. Representa la ubicación de la frontera en función de las posiciones defendidas por una y otra parte dentro de la Comisión mixta. En el medio, una línea de puntos representa el acuerdo al que llegaron los actores políticos y diplomáticos:

27 AHL, Colombia, 2.4.5 Colonización colombiana: Oficio sobre la visita a la región fronteriza de una comisión Colombiana, 1928, Prefectura del Departamento de Loreto, Iquitos, 13 de diciembre de 1928, n°493 al Señor Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores.

28 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-11, *Memorándum del Capt. H.B. Grow, para su excelencia el Presidente del Perú*, junio de 1929.

29 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-11, Documento N°8, Lima, 3 de junio de 1929, anexo.

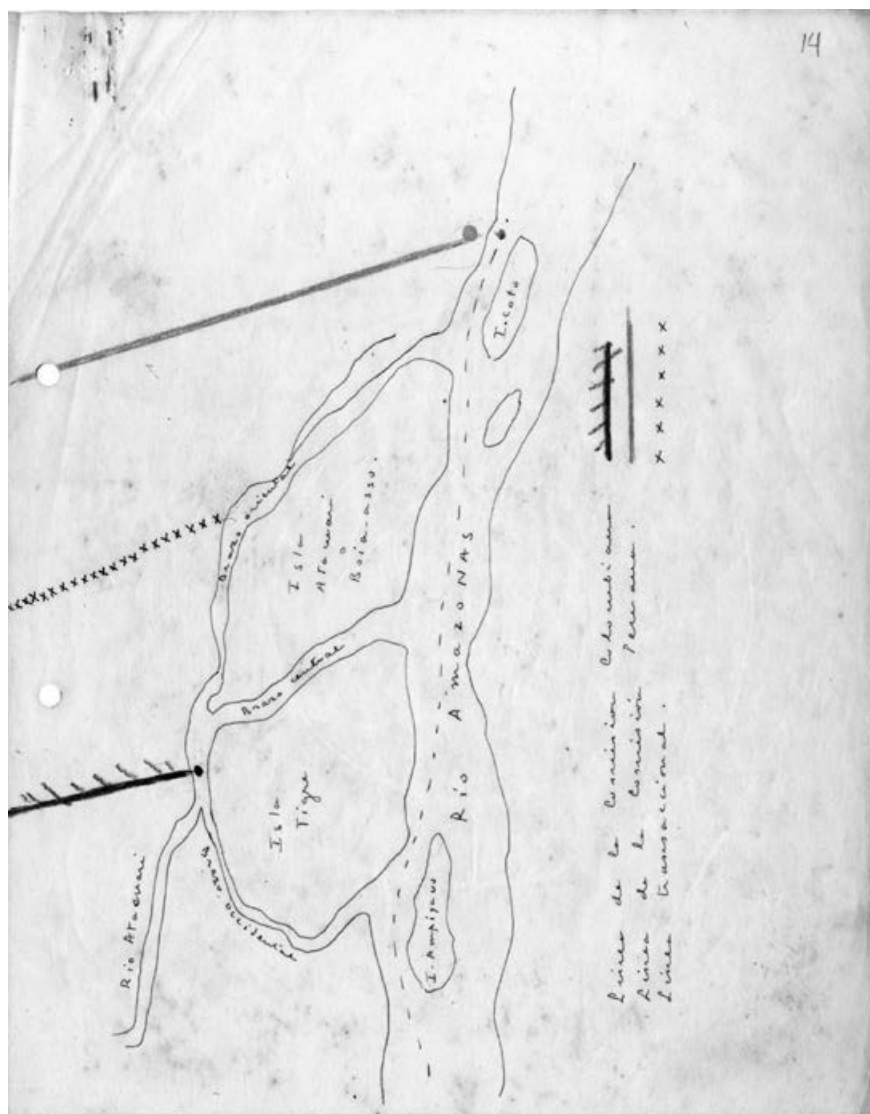


Figura 4. Mapa de H. Grow representando las negociaciones a propósito de la ubicación de la frontera en el Putumayo (junio de 1929).

Fuente: AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-11, documento n°8, Lima, 3 de junio de 1929, anexo.

Mucho más que el resultado de un trabajo científico, la frontera peruano-colombiana en el Putumayo aparece entonces como consecuencia de acuerdos e intereses políticos.

Conclusiones

Las negociaciones diplomáticas entre el régimen leguista y el gobierno colombiano remiten a las modalidades de tipo colonial de ejercicio de la dominación política por parte de las elites dirigentes de ambos países en sus márgenes territoriales. Evidentemente, desde Lima y Bogotá, los actores políticos y diplomáticos no procuraron tener en cuenta los usos socioeconómicos preexistentes del espacio por parte de los actores regionales y locales, menos aún, de las poblaciones indígenas. Estas modalidades de construcción de la frontera en los confines amazónicos contribuyeron a que la frontera, impuesta por el poder central, fuera por mucho tiempo discutida. En aquellos márgenes lejanos, el proyecto de territorialidad del régimen leguista chocó con múltiples formas de oposición, que contribuyeron a socavar el preconceito de una omnipotencia estatal.

Inmediatamente después de que la Comisión mixta acabara su trabajo, un puñado de militares y representantes de las elites socioeconómicas de Loreto (entre ellos los antiguos «barones» del caucho) intentaron el 1^{ro} de septiembre de 1932 apoderarse por la fuerza de la guarnición de Leticia. La invasión fue el punto de partida de un recrudecimiento de violencia que desembocó en el conflicto armado entre el Perú y Colombia (Camacho Arango 2017). Añadimos que, en un memorando del 15 de julio de 1933, Roberto López, el antiguo jefe de la comisión peruana de demarcación, proclamó la nulidad del tratado Salomón-Lozano³⁰. Su declaración intervenía solo algunos meses después de la firma de un armisticio bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones, y antes de las negociaciones de Río de Janeiro que, sin embargo, llevarían a revalidar el tratado de 1922.

En fin, a pesar de las dificultades y obstáculos, subrayamos que la documentación producida por la Comisión Mixta, y especialmente los mapas, contribuyó significativamente a la apropiación intelectual y científica de los territorios amazónicos. Sin embargo, el trazado material de la frontera no significó que la dominación política y la ocupación territorial fueran realmente efectivas y definitivas. En los hechos, la mera demarcación resultó insuficiente para modificar radicalmente la vida cotidiana de las poblaciones transfronterizas y moldear identidades territoriales nacionales. Al respecto, las investigaciones de los *border studies* han demostrado que los procesos de territorialización de los Estados y de transformación de las regiones fronterizas se llevan a cabo en largos espacios temporales y dependen, ante todo, de la capacidad material de los Estados (ver entre otros a Adelman y Aron 1999; Saint John 2011).

30 AHL, Colombia, 2.4.10 Comisión Mixta Demarcadora 1928-1932, Legajo 198, LCA 8-16 Ministerio de Relaciones exteriores, *Memorandum de Roberto López sobre el triángulo de Cuhimbé / San Miguel*, Lima, 15 de julio de 1933. El antiguo jefe de la comisión peruana concluyó que el tratado Salomón-Lozano era inaplicable con motivo de que en 1922 la compensación territorial por el triángulo Cuhimbé-San Miguel incumbía teóricamente a la soberanía de Ecuador.

Archivos

Archivo General de la Nación (AGN) – Lima.

Biblioteca Nacional del Perú (BNP) – Lima.

Archivo Histórico de Límites (AHL), Ministerio de Relaciones Exteriores -Lima.

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINRELEX) – Lima.

Archivo Histórico Militar (AHM) – Lima.

Library of Congress – Washington D.C.

Bibliografía

Adelman Jeremy, Aron Stephen

1999 «From Borderlands to Borders: Empires, Nation-States, and the Peoples in between in North American History». En: *The American Historical Review*, vol. 104, n°3 (Jun.), pp. 814-841.

Arana, Julio C.

1927 *El protocolo Salomón Lozano, o el pacto de límites con Colombia*, Lima: Sanmarti y Cía.

Arbulú Gallieni Guillermo

1988 *El Ejército y la ingeniería militar en el Siglo XX, 1900-1990*, Lima: Taller de la I.E.

Bákula Juan Miguel

1988 *La política internacional entre el Perú y Colombia*, Bogotá: Editorial Temis.

Bákula Juan Miguel

2002 *Perú, entre la realidad y la utopía: 180 años de política exterior*, Lima: Fondo de Cultura Económica- Fundación Academia Diplomática del Perú, 2002.

Basadre, Jorge

1968 *Historia de la República del Perú*, Lima: Editorial Universitaria, 1968 (6e ed.).

Burchell Graham, Gordon Colon, Miller Peter (eds.)

1991 *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, Chicago: Chicago University Press.

Camacho Arango, Carlos

2016 «Relaciones entre civiles y militares durante el Oncenio de Augusto Leguía (Perú, 1919-1930)». En: *Historia Crítica*, n°60, (abril-junio), pp. 103-122.

Camacho Arango, Carlos

2017 *El conflicto de Leticia (1932-1933) y los ejércitos de Perú y Colombia*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Chirinos Soto, Enrique

1982 *Historia de la República, 1821-1982*, Lima: Editorial Minerva.

Dagicour, Ombeline

2017 «Construire l'Etat, régénérer la Patrie. Savoirs géographiques et production du territoire au Pérou (1900-1930)», thèse de doctorat dirigée par Annick Lempérière et Aline Helg, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Université de Genève.

Dávila Herrera, Carlos

2003 *El conflicto y la historia de Loreto*, Lima: Seminario de Historia Rural Andina (UNMSM).

Drinot, Paulo

2011 *The Allure of Labor: Workers, Race, and the Making of the Peruvian State*, Durham-London: Duke University Press.

García Jordán, Pilar

1998 *Fronteras, colonización y mano de obra indígena en la Amazonia andina (siglos XIX-XX)*, Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Universitat de Barcelona, .

García Jordán, Pilar y Sala i Vila Nuria (coord.)

1998 *La nacionalización de la Amazonía*, Barcelona: Universitat de Barcelona.

García Jordán, Pilar

1992 «Reflexiones sobre el darwinismo social, inmigración y colonización. Mito de los grupos modernizadores peruanos (1821-1919)». En: *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 21, Lima, pp. 961-975.

Lefebvre, Camille

2011 «Science et frontière en équation : Le terrain de la mission Tilho entre Niger et Tchad (1906-1909)». En: Blais Hélène, Deprest Florence, Singaravélou Pierre (dir.), *Territoires impériaux. Une histoire spatiale du fait colonial*, Paris : Publications de la Sorbonne, pp. 109-138.

Mayer de Zulen, Dora

El oncenio de Leguía. Callao: Tip. Pena, (sin fecha).

Octavio Feijo, Manuel

1923 *Acusaciones contra un régimen de tiranía*, París: Impr. Cosmos.

Pons Muzzo, Gustavo

1961 *Las fronteras del Perú. Estudio Histórico*, Lima: Iberia.

Porras Barrenechea, Raúl y Wagner de Reyna, Alberto

1981 *Historia de los límites del Perú*, Lima: Editorial Universitaria (2° ed.)

Rouquié, Alain

1982 *L'Etat militaire en Amérique Latine*, París: Seuil.

Safford, Frank

1976 *The Ideal of the Practical: Colombia's Struggle to form a Technical Elite*, Austin: University of Texas Press.

Saint John, Thibaut

2007 «La Mission militaire française au Pérou de 1896 à 1932», mémoire de master dirigé par Annick Lempérière, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, .

Saint John, Rachel

2011 *Line in the Sand. A History of the Western U.S.-Mexico Border* Princeton: Princeton and Oxford University Press.

Tudela y Varela, Francisco

1925 *La política internacional y la dictadura de Don Augusto B. Leguía*, París: Impr. Omnens et Cie.

Ugarteche, Pedro

1933 *Documentos que acusan: el tratado Salomón Lozano*, Lima: Impr. Tip. Estanco del Tabaco.

Ugarteche, Pedro

1930 *La política internacional peruana durante la dictadura de Leguía: sometidos al imperialismo yankee, tratado de límites con Colombia. Cómo ha jugado Leguía con la Cuestión del Pacífico, el regreso del Perú a la Sociedad de las Naciones*, Lima: Impr. C.A. Castrillón.

Velásquez, David

2013 *La reforma militar y el gobierno de Nicolás de Piérola. El Ejército moderno y la construcción del Estado peruano*, Tesis para el grado de magister en Historia dirigida por Cristóbal Aljovín de Losada, Lima: UNMSM.